

**0051/2024**

El proyecto tiene como objeto, según resulta de su Exposición de Motivos y de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), la mejora de protección de los perjudicados en caso de siniestros causados por vehículos articulados, así como la modificación de aspectos procedimentales del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA). Todo ello, como consecuencia de la necesidad de transposición de la Directiva (UE) 2021/2118, de 24 de noviembre de 2021 en aquello que no ha sido ya objeto de transposición mediante la Disposición Adicional sexta de la ley 11/2023, de 8 de mayo, o por el específico proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que por un lado, traspone de la Directiva 2021/2118 citada lo relativo al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, pero asimismo incorpora las modificaciones propuestas en el Informe Razonado publicado por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración para mejorar el marco legal de la cuantificación de las indemnizaciones por daños corporales en accidentes de circulación. Sobre este proyecto de ley esta AEPD ha emitido los informes 037/2023 y 014/2024, que se reiteran.

En lo referente al proyecto de Real Decreto sometido ahora a informe, en primer lugar, se regula el derecho de los perjudicados a poder presentar la reclamación a la entidad aseguradora del remolque en caso de siniestros causados por vehículos articulados, cuando no pueda ser identificado el vehículo que arrastraba el remolque, lo que no presenta cuestiones relevantes desde la perspectiva de la normativa de protección de datos.

En segundo lugar, se modifican determinados aspectos procedimentales del Fichero de Información de Vehículos Asegurados (FIVA).

Para el análisis de estos aspectos hay que partir de que los actuales art. 24 y 25 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre ya contienen la prevención de que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) actuará como organismo de información para suministrar al perjudicado la información necesaria para que pueda reclamar a la entidad aseguradora o a su representante para la tramitación y liquidación de siniestros, facilitando información relativa al número de matrícula de los vehículos con estacionamiento habitual en España; número de la póliza de seguro de responsabilidad civil con indicación de la fecha de inicio y fin de

vigilancia de la cobertura; entidad aseguradora, etc. así como el nombre y dirección del propietario o conductor habitual del vehículo, si el perjudicado tuviere un interés legítimo, para lo que se prevé la colaboración con la Dirección General de Tráfico. A dicha información, añade el párrafo final del apartado 2 del art. 25 del TR, tendrán acceso, además de los perjudicados, los aseguradores de éstos, los organismos de información de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, en su calidad de organismo de indemnización, y los organismos de indemnización de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, así como los fondos de garantía de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo. Tendrán también acceso a dicha información los centros sanitarios y servicios de emergencias médicas que suscriban convenios con el Consorcio de Compensación de Seguros y las entidades aseguradoras para la asistencia a lesionados de tráfico. Esto es, ya se prevén en la ley las comunicaciones necesarias a fin de promover el conocimiento para que el perjudicado pueda ver favorecido su derecho a reclamar y a la reparación, en su caso, de los daños que se le han causado.

Ello sería conforme, por otra parte, con la redacción del art. 23.5 de la Directiva 2009/103/CE, que establece que [l]os Estados miembros garantizarán que los organismos de información (en este caso el CCS), sin perjuicio de sus obligaciones en virtud de los apartados 1 y 4 [de la Directiva], proporcionen la información estipulada en dichos apartados *a cualquier parte implicada en un accidente causado por un vehículo cubierto por el seguro contemplado en el artículo 3.*

En el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos, aprobado por Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, que el proyecto ahora informado viene a modificar, ya regula, en desarrollo del texto legal, el FIVA en sus arts. 23 y siguientes. Dicho fichero FIVA tiene una doble finalidad, tal y como reconoce el Anexo del Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor (RSOV), que son a) el suministro de información a los implicados en un accidente de circulación, y b) el control de la obligación de aseguramiento, finalidad esta última igualmente acorde con la Directiva 2006/9/CE, que lleva por título “relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, *así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad*”.

En concreto, en este art. 23 del RSOV se viene a realizar una modificación que integra en el texto del articulado (en vez de en el Anexo del Reglamento), y a su vez amplía, la relación de las personas y entidades a quienes la información ya mencionada del CCS contenida en dicho fichero FIVA será accesible. Esta AEPD no plantea objeciones a dicha relación, sin perjuicio de lo que posteriormente se mencionará al analizar el art. 28 del RSOV.

El art. 24 se modifica para, a solicitud del CCS (véase MAIN), añadir la “hora” del inicio y finalización de la vigencia del contrato de seguro a los datos que las aseguradoras han de proporcionar al FIVA. En este precepto esta AEPD desea llamar la atención del prelegislador a la redacción actual del inciso final del apartado 2 del art. 24, que no ha sido modificado en la redacción del proyecto. Dice así: A estos efectos, el intercambio de información [entre entidades aseguradoras y el CCS] se podrá realizar *por teléfono, fax o correo electrónico*. Parecería razonable que, al igual que se ha modificado en el Proyecto el art. 27 del RSOV para decir que “La consulta al fichero se realizará por medios telemáticos a través del sitio web del Consorcio de Compensación de Seguros”, se modifique este art. 23 para que la comunicación de las aseguradoras al CCS tenga una manera de comunicación más acorde a los medios actuales, y sobre todo se incorporen criterios de seguridad y confidencialidad en la transmisión de dicha información.

En el art. 27.1 del Proyecto, tal y como se ha mencionado, se establece que “La consulta al fichero se realizará por medios telemáticos a través del sitio web del Consorcio de Compensación de Seguros”, lo cual parece que deja fuera de la posibilidad de consulta a aquellas personas físicas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 14 ley 39/2015, de 1 de octubre), entre quienes pueden encontrarse los perjudicados por el accidente o los tomadores del seguro de automóviles, o los propietarios o conductores de vehículos que no hayan celebrado ellos el contrato de seguro (véanse todos ellos en el art. 23.2 del Proyecto).

El art. 28 del Proyecto contiene una modificación sobre el texto actualmente vigente, y es este establece que, a efectos de la obligación de asegurarse, se colaborará entre el Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico, “que podrán cederse, entre sí”, los datos que figuren en sus ficheros automatizados que expresamente prevean esta cesión. El Proyecto sustituye dicha expresión por “que podrán acceder respectivamente”, a los datos que figuren en los ficheros automatizados que expresamente prevean esta cesión. En realidad, en opinión de esta Agencia, el texto modificado no presenta variación sustancial alguna sobre el anterior en relación con la normativa de protección de datos, pues ambas son expresiones que hacen referencia al mismo concepto de “tratamiento de datos”). Ahora bien, de la lectura de la MAIN parece resultar que dicho cambio porque se entiende que la “cesión entre sí” de los datos (expresión del texto vigente) hace referencia a una suerte de cesión caso a caso, en la que había que solicitar el envío de determinada información y responderla, frente al “acceso” del texto propuesto, en que parece referirse a que cada una de las entidades a que se refiere el texto podrá “acceder” a las bases de datos o sistemas del otro y extraer, sin necesidad de solicitar y/o esperar respuesta, la información que necesite. Ello trae, además, causa, como mero desarrollo con el mismo texto, de la

modificación propuesta al art. 2.2 del Real Decreto Legislativo 8/2004 en el proyecto de ley informado por esta AEPD en el **Informe 037/2024**. Parece conveniente aquí recordar lo expuesto por esta AEPD en dicho informe al respecto, cuyo contenido se reitera:

(comienzo de cita):

Se modifica el art. 2, apartado 2 del Real Decreto Legislativo 8/2004 (en adelante RDLeg 8/2004) para añadir dos párrafos, del siguiente tenor:

*La información a la que se refiere el párrafo anterior será objeto de tratamiento automatizado por el Consorcio de Compensación de Seguros y estará disponible para su consulta a través de su sitio web, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. El Consorcio de Compensación de Seguros establecerá las medidas adecuadas para facilitar el acceso a la información con inmediatez. Reglamentariamente se determinarán los casos en los que la información deba referirse exclusivamente a si un vehículo está o no asegurado en determinado momento y aquellos otros en los que, además, proceda informar de la entidad aseguradora y del historial de aseguramiento del vehículo.*

*El Consorcio de Compensación de Seguros y el Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de Tráfico, coordinarán sus actuaciones para el adecuado ejercicio de sus respectivas competencias en este ámbito, y podrán acceder con tal fin a los datos que figuren en sus ficheros correspondientes.*

La consulta por cualquier tercero de los datos personales que puedan contenerse en el sitio web del CCS constituye un tratamiento de datos personales regido por el RGPD y la LOPDGDD, y los criterios para su consulta, en cuanto que suponen una injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos, deberían de establecerse en una norma con rango de ley, como se ha expuesto con anterioridad en este Informe.

El segundo párrafo establece un acceso de los datos que para los fines propios de cada una de ellas tiene el CCS y la DGT. Debe aquí recordarse, como se recoge en nuestra Guía ya tan citada, la doctrina del Tribunal Constitucional contraria a los tratamientos masivos de datos personales, recogida en su sentencia 17/2013, de 31 de enero de 2013, conforme a la cual (i) habrá de evitarse el

acceso indiscriminado y masivo a los datos personales (ii) el dato en cuestión solicitado habrá de ser pertinente y necesario (iii) para la finalidad establecida en el precepto (iv) la solicitud de acceso a los concretos datos personales habrá de motivarse y justificarse expresamente, (v) de manera que ello posibilite su control por el cedente (vi) y se evite un uso torticero de esa facultad con accesos masivos. Ello supone (vii) que ha de quedar garantizada la posibilidad de analizar si en cada caso concreto el acceso tenía amparo en lo establecido en la ley.

En consecuencia, el acceso recíproco a los datos de cada uno de dichos organismos habrá de cumplir con dichas condiciones, lo que sería conveniente que se recogiera en la norma.

(fin de cita)

Por otra parte, el párrafo final ha sido modificado para actualizar las referencias al RGPD y a la LOPDGDD, frente a la cita de la anterior Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, lo que es correcto.